



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

Expte n°: 13068 / 2022 - AML

**Autos: “OLX S.A. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”**

Sentencia Definitiva del Expte Nro. 13068/2022

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS:

I.- Surge de autos que mediante la Resolución N° 2021-756-E-AFIP -DVJUDA#SDGTLSS, la AFIP hace lugar parcialmente a la impugnación interpuesta, confirma la deuda intimada por la trabajadora Diehl, Luisa y deja sin efecto la intimación realizada por el Sr. García Rodrigo y Guzmán Alcocer, Zulma, ello con sustento en el dictamen jurídico que antecede.

II- Así, se le notificó a la contribuyente de lo resuelto, informándole que la resolución era susceptible de ser revisada por medio del procedimiento establecido en el punto 8 de la Resolución 79/98 AFIP, o por la vía del recurso de apelación ante esta Alzada.

Conforme se desprende de las presentes actuaciones, la parte actora optó por recurrir a esta instancia judicial, sin dar cumplimiento con el requisito del pago previo establecido por el art. 15 de la ley 18.820.

III.- Así las cosas, corresponde analizar en primer término, si corresponde eximir a la recurrente del principio solve et repete exigido por la normativa precedentemente citada. A tal fin, la recurrente ofrece seguro de caución N° 657.698 emitida a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos por la firma Fianzas y Crédito S.A Compañía de Seguros, en garantía como sustitución de pago previo de la obligación depósito previsto en el art. 15 de la Ley 18.820, ad 12 de la Ley 21.864 (modificada por la Ley 23.659) y art. 26 de la ley 24.463.

Compartiendo lo dictaminado por el Sr. Agente Fiscal en autos “Parflik S.A.C.I .F.I.A”(dictamen de la Fiscalía N° 2, de fecha 22/12/93, n° 4935/93) y lo resuelto por este Tribunal en los mismos autos, mediante sentencia de fecha 14/4/94, n°57859/94 y en autos “ Tronchet Pour L Home S.A c/ DGI s/ Impugnación de deuda”, sentencia n° 77225 del 12/06/95 , y por la Sala II del fuero en autos “Club Atlético Vélez Sársfield Asociación Civil c/ DGI , sent. 72.655 del 18.12.98 y por la Sala III en autos “Creaciones Ginesse SAIC c/ DGI”, sent. 68.448 del 17.5.98, el depósito previo que exige el art. 15 de la ley 18.820 para la concesión del recurso importa el cumplimiento



provisional y adelantado de la condena, constituyendo así una razonable medida precautoria impuesta en salvaguardia del interés colectivo comprometido.

En ese contexto, este tribunal entiende que la fianza acompañada, garantiza el pago de las obligaciones reclamadas en las actas en cuestión, por lo que debe eximirse al recurrente de la carga impuesta por el art. 15 de la ley 18.820 y artículo 26 de la ley 24.463, ya que está suficientemente garantizada la obligación.

En sentido análogo se han pronunciado las tres Salas que integran el fuero, entre otras, así como la Sala II en autos “COMPAÑÍA DE SERVICIOS HOTELEROS S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda”, SD. 114.039, la Sala III en autos “TREVES ARGENTINA S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda”, SD. 110.602, y esta Sala I en autos “FRIGORÍFICO GORINA S.A.I.C. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda”, SD. 124.944.

Ello así, corresponde tener por cumplido el requisito exigido por el art. 15 de la ley 18.820, mod. por art. 26 de la ley 24.463 y entrar a considerar el fondo de la cuestión.

III) La apelante argumenta que la resolución que se recurre se ampara para determinar deuda, en el mero hecho de haber citado a la Sra. Diehl, sin que comparezca a las dos audiencias previstas. Considera errado que, ante la inasistencia a las citaciones, el organismo pretenda endilgar los efectos de esa falta de comparecencia en su contra. Agrega que la fecha declarada en la oportunidad de efectuarse el relevamiento, responde a un error involuntario de la persona relevada. Agrega que cuando los inspectores de AFIP se apersonaron a las oficinas de la empresa, efectuaron 186 entrevistas, de las que se detectaron tres inconsistencias. Con posterioridad al dictado de la sentencia de la Sala, el fisco procedió a fijar fecha de audiencias, a las que asistieron los Sres. Zulma Guzmán Alcocer y Rodrigo Rubén García quienes rectificaron lo declarado oportunamente respecto a las fechas de ingreso y, en consecuencia, el fisco dejó sin efecto el cargo formulado respecto a ellos. Y que, la Sra. Diehl no asistió a las audiencias, por lo cual se tomó por cierta la primigenia declaración testimonial, en la que había errado por un mes la fecha de ingreso, lo que entiende un mero error o falta de memoria. Subsidiariamente argumenta sobre los intereses resarcitorios, solicitando que se dejen sin efecto atento a que a la inexistencia de mora culpable y, también sobre la improcedencia de la multa.

IV) Surge de autos que, luego de la sentencia dictada por la Sala 1 el 22/10/2019 -tramitado por número de expte. 160.274/2018-, vuelven las actuaciones al organismo fiscal, , para que dicte nueva resolución con respecto de la presentación





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

efectuada el 17/11/2016, contra las actas de inspección e infracción, derivas de la orden de intervención N° 1.485.257, en virtud de las cuales se había intimado al pago de \$64.611,66 en concepto de deuda de los Recursos de la Seguridad Social, por diferencias en las fechas de ingreso de los Sres. García, Rodrigo Rubén (períodos 07/2009 a 12/2009), Diehl, Luisa (período 08/2015) y Guzmán Alcocer, Zulma (09/2015 a 10/2015).

Mediante la resolución que aquí se recurre, se hizo lugar parcialmente a la impugnación interpuesta por la rubrada, confirma la deuda de capital e intereses más multa intimadas por la trabajadora Diehl y deja sin efecto la intimación efectuada respecto del Sr. García y Guzmán.

Sentado ello, la presente causa radica en determinar si corresponde confirmar o no, la determinación de deuda realizada por el organismo por la Sra. Diehl.

Se observa que la trabajadora mencionada, pese a haberse ofrecido y aceptado su testimonio, el mismo no fue producido y el organismo fiscal vuelve a tener por cierto lo expresado por ella en el relevamiento, respecto a la fecha de ingreso.

Si bien como ya se manifestara reiteradamente, este tribunal comparte el valor probatorio de las manifestaciones espontáneas y sorpresivas efectuadas por los empleados ante las autoridades administrativas, en el caso de autos los datos declarados no tienen aptitud para formar convicción respecto de la cuestión. Pues en autos, el único elemento que puede tomarse para resolver, es la declaración espontánea de la persona relevada y en el caso particular, siendo el único elemento a evaluar no puede ser tomado para dictar una sentencia válida.

Ello así, el organismo fiscal no ha merituado debidamente lo expresado por la parte actora, ni da respuesta precisa a sus planteos, ratificando el cargo formulado cimentando la resolución en el hecho que "... no escapa a este servicio jurídico que no obstante la validez de ese instrumento, la información allí consignada podría ser equívoca si la empleada, por algún motivo, hubiera incurrido en un error al responder pero ello no quedó acreditado en autos..." pero, al no comparecer volvió a tener por válidas sus declaraciones originarias (relevamiento), fundamentando su postura en que la contribuyente no desvirtúa el cargo ni tacha de nulas las actas, dando el ejemplo de la acción de redargución de falsedad.

Esta afirmación no tiene asidero, en tanto aunque el procedimiento puede ser iniciado de oficio o a instancia de parte, la impulsión de éste corresponde a la Administración, en razón de que con él no tiende a satisfacer simplemente un interés



individual, sino un interés público: el administrativo (ver Hutchinson, Tomás “Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549”, pág 29 y ss).

Por lo expuesto, no resultando de las constancias de autos que se hayan arbitrado medidas suficientes para esclarecer la temática debatida en autos, ni se han sumado fundamentos en la resolución recurrida por los cuales este tribunal pueda dictar un pronunciamiento que produzca efectos jurídicos válidos (cfr. art. 1 incs. a, b c y f de la ley 19.549 y esta Sala en autos “Industrias Metalúrgicas Dino Bartoli c/ Administración Federal de Ingresos Públicos –DGI- s/ Impugnación de Deuda”, sentencia definitiva N° 119.396 del 29/06/06, entre otros), corresponde declarar formalmente admisible el recurso y dejar sin efecto la resolución recurrida.

V- Atento a como se resuelve la cuestión, resulta abstracto expedirse sobre los restantes agravios descriptos en el acápite III).

VI- En atención a que la AFIP no es equiparable con las partes en las contiendas judiciales comunes, sino que actúa oportunamente en defensa del interés general, las costas se imponen en el orden causado (cfr. art. 68 del CPCCN).

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Dejar sin efecto la resolución recurrida de conformidad a los parámetros brindados precedentemente, 2) Imponer las costas por su orden.

Regístrese, notifíquese, publíquese y, oportunamente, remítanse.